

## 27ª SESION ORDINARIA DEL 24 DE JULIO DE 1858

## Presidencia del Sr. Luque

## PRESIDENTE

ARAOZ

SORIA

LOPEZ (D. TIBURCIO)

RODRIGUEZ

GARZON

ALVEAR

FEIJOO

GORDILLO (D. JOSE)

VALLE

GORDILLO (D. V.)

CONDARCO

OCAMPO

ZUVIRIA

DURAN

LOPEZ (D. R.)

FERREIRA

GONZALEZ

NAVARRO

GARCIA

FUNES

CHENAUT

WARCALDE

COLODRERO

En el Paraná, Capital Provisoria de la Confederacion Argentina á los veinticuatro dias del mes de Julio del año del Señor de 1858, reunidos en su Sala de Sesiones los Sres. Diputados anotados al margen con inasistencia de los Sres. Quesada, Pardo y Victorica con aviso, y de los Sres. Cómas, Gutierrez, Graz, Dact, Lucero, Posse (D. Justiniano), Diaz, Rodriguez y Posse (D. Filemon) sin aviso, el señor Presidente declaró abierta la sesion, y continuó la discusion de la orden del dia suspendida en la sesion anterior.

los Tribunales Superiores ó de Alzada de Provincia á las causas en que deben conocer en apelacion las Cortes de Distrito; porque pudiera haber Tribunales de Alzada en alguna Provincia que no sean inferiores, y es preciso fijarse á qué Tribunal se apela en las causas concluidas en aquellos, á las Cortes de Distrito por ejemplo.

El señor Araoz: Creo que no es necesaria la adicion que propone el señor Diputado preopinante, porque es claro que de un Tribunal de Provincia debe apelarse á un Juzgado de Seccion.

El señor Funes: El señor Diputado no se fija en que si de un Juzgado de 1ª instancia de Provincia se apela á uno de Seccion Federal, de una Cámara de Justicia Provincial debe apelarse á un Tribunal mas alto. Creo, pues, que así como de un Juzgado de 1ª Instancia se apela á uno de Seccion, de un Tribunal de 3ª instancia de Provincia debe apelarse á la Corte de Distrito por lo menos.

El señor Ferreyra: No creo necesaria la adicion propuesta desde que el artículo dice «que las Cortes de Distrito conocen en apelacion de los Tribunales de Provincia en los asuntos regidos por la Constitucion y leyes nacionales, en los que la Confederacion sea parte y en los que se versen entre vecinos de diferentes provincias.» Creo, pues, que no puede darse un caso fallado en 3ª instancia en la Provincia, que no esté comprendido en los que se expresan en el artículo que se discute. Por consiguiente, aunque no se consigne en él la adicion que se propone, la Corte de Distrito debe conocer en esos casos en apelacion de los Tribunales de 3ª instancia en las Provincias. Además de esto, señor, debe tenerse presente que en el artículo 5º de esta ley se ha sentado el principio general de que la Justicia Federal excluye á la de Provincia en los casos en que aquella tiene una jurisdiccion originaria y que en los demás casos ejerce una jurisdiccion concurrente con la de Provincia en grado de apelacion ó enmienda.

El señor Garzon: La adicion que se propone sería una redundancia en este artículo, porque ya se expresa en el artículo 15 que la Suprema Corte conoce en grado de apelacion en las causas que vengan de los Tribunales Superiores de Provincia. Por consiguiente es

Se puso en discusion el artículo 24 del proyecto de Ley de la Justicia Federal; su tenor es el siguiente:

Art. 24. Corresponde á las Cortes de Distrito originariamente, el conocimiento y decision de las causas que versen sobre puntos regidos por los tratados con las naciones extranjeras, de las de almirantazgo y jurisdiccion marítima y de los recursos de fuerza.

No haciendose observacion á este artículo se sometió á votacion, y fué aprobado por unanimidad.

Se leyó el artículo 25, su tenor es el siguiente:

Art. 25. En los demás asuntos regidos por la Constitucion y leyes Nacionales, en los que la Confederacion sea parte y en los que se versen entre vecinos de diferentes Provincias, conocen y deciden las Cortes de Distrito en apelacion de los Jueces Federales,

El señor Funes dijo: Aunque este artículo está conforme con el correspondiente del presentado por el Poder Ejecutivo y el sancionado por el Honorable Senado, me permitiré proponer que se adicione aumentando los casos de delitos que vengan en apelacion de

claro que siendo los Juzgados de Alzada Tribunales Superiores de Provincia, corresponde á la Suprema Corte conocer en las causas que vengan de esos Tribunales.

Después de algunas otras observaciones hechas por los Sres. Funes, Ferreyra y Garzon, explanando las que habían emitido anteriormente, se puso en votación el artículo 25 y resultó aprobado por unanimidad.

Se puso en discusión el artículo 26, su tenor es el siguiente:

Art. 26. Las Cortes de Distrito conocen originariamente en las causas concernientes á la conducta ministerial de sus empleados subalternos y de los Jueces Federales de Sección y sus Fiscales.

El señor Garzon dijo: Desearía saber del miembro informante de la Comisión si en esta palabra: y sus Fiscales, se encuentran solamente comprendidos los Fiscales de los Juzgados de Sección, ó también los de las Cortes de Distrito.

El señor Funes: Desde que se hace relación en general á las causas concernientes á la conducta ministerial de los Jueces de Sección y empleados subalternos de los Tribunales Federales inferiores, es claro que se comprende solamente á los Fiscales de los Juzgados de Sección.

El señor Araoz: Según el sentido que el señor Diputado informante da á este artículo encuentro muy mal redactada su última parte, y creo que se explicaría mejor la mente de la Comisión diciendo: «de los Jueces y Fiscales de Sección.»

El señor Funes: Hablándose de los Jueces Federales de Sección, la palabra «Fiscales» que le sigue no puede referirse á otros que á los de Sección. Sin embargo, la Comisión acepta la modificación que se propone suprimiendo la palabra sus.

El señor Ministro: Me parece que estaría mas clara la redacción de este artículo en la forma siguiente: *Las Cortes de Distrito conocen originariamente en las causas concernientes á la conducta ministerial de sus empleados subalternos, de los Jueces Federales y Fiscales de Sección.*

Habiendo deferido la Comisión á la modificación propuesta por el señor Ministro, se puso á votación el artículo 26 en esa forma y fué aprobado por unanimidad.

Puestos sucesivamente á discusión y votación los artículos 27 y 28 fueron aprobados por unanimidad; su tenor es el siguiente:

Art. 27. Los fallos de estas Cortes son inapelables no excediendo su importancia de quinientos pesos excluidas las costas.

Art. 28. Las Cortes de Distrito propondrán sus empleados subalternos y podrán renovarlos con justa causa.

Se puso en discusión el artículo 29; su tenor es el siguiente:

Art. 29. Los Vocales, el Fiscal y empleados subalternos de las Cortes de Distrito prestarán juramento ante el Presidente de la misma Corte para entrar al ejercicio de sus funciones.

El señor Garzon dijo: Como creo que este artículo tiene relación con otro que se suprimió, y en el cual se expresaba ante quién debía prestar juramento el Presidente de la Corte de Distrito, deseo que se fije en este artículo ante quien debe prestar aquel juramento, ante el Gobernador de Provincia, por ejemplo, ó alguna otra persona que lo represente para ese acto, porque debe expresarse en alguna parte ante quién deben prestar juramento los Presidentes de la Corte de Distrito antes de recibirse.

El señor Funes: En un cuerpo colegiado no puede haber presidente antes de su instalación. Por consiguiente, debe hacerse en las Cortes de Distrito lo que se hace en el Congreso en la renovación de las Cámaras en que se nombra un Presidente Provisorio para el cange de los poderes. Creo, pues, que debe expresarse en el artículo que el Presidente prestará el juramento ante los otros Jueces, y éstos en mano de aquel.

El señor Ministro: Creo que para evitar dificultades podría ponerse en el artículo que los Vocales de la Corte de Distrito prestarán el juramento ante el Presidente, ó en su defecto, ante la persona que el Ejecutivo comisionare para este acto.

El señor Duran: Deseo que se ponga ante la Cámara de Provincia ó la autoridad que designe el Ejecutivo, y no ante una persona.

El señor Zuviria: Creo que se conciliarán todas las opiniones redactándose este artículo en estos términos:—*Los Vocales, el Fiscal y empleados subalternos de las Cortes de Distrito prestarán juramento ante el Presidente de la misma Corte para entrar en el ejercicio de sus funciones; (la primera vez ante la persona que comisione el Ejecutivo para este acto).*

Habiendo deferido la Comisión á la modificación propuesta por el señor Zuviria, se procedió á votar el artículo en esa forma, y resultó aprobado por unanimidad.

Puesto sucesivamente á discusión y votación el artículo 30, recibió igual aprobación; su tenor es el siguiente:

Art. 30. Son Juzgados Federales de Sección los de 1ª Instancia establecidos en el Territorio Federalizado y demás que se establecieren en las Provincias conforme á esta Ley.

Se puso en discusión el artículo 31; su tenor es el siguiente:

Art. 31. En cada Provincia que formará una ó mas Secciones Judiciales, habrá uno ó mas Juzgados Federales compuestos de un Juez, un Fiscal y demás empleados que señale su reglamento interior.

El señor Araoz dijo: Noto en este artículo la misma redacción que se adicionó en el 22, porque parece que los empleados subalternos á que se refiere componen también el Tribunal.

El señor Funes: La Comisión no tiene inconveniente en que se modifique en los términos en que lo fué el artículo á que el señor Diputado se ha referido.

El señor Araoz: Propongo, pues, el artículo en la forma siguiente:

Art. 31. En cada Provincia que formará una ó mas Secciones judiciales habrá uno ó mas Juzgados Federales compuestos de un Juez y un Fiscal, y tendrán los demás empleados que señale su reglamento interior.

Puesto á votación el artículo 31 en esta forma fué aprobado por unanimidad.

Se puso en discusión el artículo 32; su tenor es el siguiente:

Art. 32. Para ser Juez de Sección se requiere ser mayor de veinticinco años, ciudadano argentino y abogado con cuatro años de ejercicio.

El señor Funes dijo: Como la Honorable Cámara aceptó el artículo 23 del Honorable Senado que exige solamente cuatro años de ejercicio de su profesión á los abogados de la Confederación para ser Juez de las Cortes de Distrito, debe exigirse para ser Juez de Sección dos años de ejercicio como en el proyecto de la otra Cámara, para guardar una justa proporción.

El señor Zuviria: Entiendo que será muy difícil encontrar en la Confederación los abogados suficientes para ocupar los Juzgados de Sección, y tal vez esta prescripción sea un inconveniente para establecer los Tribunales Federales. Creo, pues, que, aunque se deben buscar para ser Jueces de Sección individuos que reúnan todas las luces necesarias para desempeñar debidamente ese cargo, no es necesario exigir en ellos la condición de ser abogados de la Confederación, porque como he dicho antes, acaso no se encontrarían los abogados suficientes para ocupar todos los Juzgados de Sección. Por esta razón creo mas conveniente omitir la última parte de este artículo.

El señor Funes: Cada uno puede juzgar si habrá ó no en la Confederación los abogados suficientes para ocupar los Tribunales Federales; pero mi opinión es que mas nos convendría tener pocos Jueces buenos que muchos y malos. Además, si el Gobierno no encuentra bastante número de abogados puede

encargar á los Jueces de Provincia de los Juzgados de Sección como se hará en el Territorio Federalizado; porque hay menos inconvenientes en que se comisione á esos jueces, que en que se nombren individuos ineptos para componer los Tribunales Federales.

El señor Araoz: Este punto, señor, es en mi concepto muy importante y muy grave, porque no puede admitirse que los Jueces Federales carezcan de la capacidad indispensable para desempeñar debidamente su cargo. Si no hay el número suficiente de abogados mas bien no deben establecerse los Juzgados de Sección mientras no se puedan plantear y servir convenientemente; porque si se nombran individuos ineptos para esos destinos, es consiguiente que cometan errores que refluirán en perjuicio de los litigantes y del país.

El señor Ministro: Las razones expresadas por un señor Diputado por Santiago para pedir la supresión de la última parte de este artículo son las mismas que tuve en vista cuando se discurrió esta ley en el Honorable Senado para pedir se dejase al Gobierno la facultad de nombrar para Jueces de Sección algunos individuos de reconocida capacidad y experiencia en el oficio de Juez, aunque no tuviesen el título de abogados, pero solo por los tres primeros años ó en calidad de interinos. No se pueden conceder, señor, en efecto las delicadas atribuciones de los Jueces Federales sino á personas competentes que conozcan bien nuestro derecho, tan nuevo por otra parte, y que por lo mismo no puede ser conocido de todos los abogados, porque no se enseña todavía en las universidades ni se practica en el foro y requiere un estudio especial, tanto un abogado como el que no lo sea, para servir en un Tribunal Federal. Por esto, señor, convendría que quedase el artículo en esta ley; con tal que se adoptase el artículo 53 del proyecto del Senado en que deja un plazo de tres años para que esta circunstancia no sea indispensable, porque no puede desconocerse las dificultades que tocará el Ejecutivo para hacer esos nombramientos; que debe tener en vista la escasez de abogados competentes, y la poca ventaja que llevarían á muchos que no son abogados, en el conocimiento de una jurisprudencia nueva, á la que mas bien perjudicarían los conocimientos de la antigua práctica. Es por esto que debe dejarse al Gobierno en los dos ó tres primeros años la facultad de elegir y nombrar los Jueces de Sección entre los individuos mas aptos, aunque no sean abogados; porque no se pueden poner Juzgados de Sección en unas Provincias y en otras no, á no ser que se extendiese la jurisdicción de los Jueces de una

Provincia al territorio de otra; lo que seria trastornar completamente el sistema que se quiere fundar. Es necesario, pues, establecer Tribunales de 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> y 3<sup>a</sup> instancia para todas las Provincias, porque no es justo que carezcan algunas respecto á administracion de Justicia de un recurso inmediato de que no carecerán las otras. Es preciso, en fin, que gocen igualmente de las ventajas del sistema que establecemos; que la Justicia Federal se haga sentir en todas partes, porque ese es el objeto de esta ley.

Es natural, señor, que el Gobierno proponga para Jueces Federales hombres idóneos y sabedores del derecho argentino, aunque no sean abogados, porque ya he dicho que no todos los abogados están en el caso de conocerlo.

No se puede tampoco delegar á los Jueces de Provincia la jurisdiccion de los Federales porque esta es una jurisdiccion de apelacion que debe ser asegurada sobre las sentencias de aquellos.

El señor Zuviria: Estoy perfectamente conforme con las ideas expresadas por el señor Ministro.

El señor Araoz: No creo conveniente que se suprima la condicion de que los Jueces de Seccion sean abogados, porque si se cree que éstos, que han consagrado muchos años al estudio de la ley, no podrán llenar debidamente su cargo, porque nuestro derecho es nuevo, menos podría librarse la interpretacion á la Constitucion y las leyes á personas absolutamente legas, ignorantes en materias jurídicas. Votaré, pues, en favor del artículo que se discute tal como lo ha presentado la Comision.

El señor Duran: Creo que entre las condiciones que se exigen para ser Juez de Seccion como para los demás Jueces Federales, deben exigirse por lo menos cuatro años de ciudadanía en ejercicio, para evitar que se nombre Juez Federal á un extranjero á los dos años de residir en el país, es decir, tan luego como haya obtenido su carta de ciudadanía, y antes de conocer nuestro derecho lo bastante para estar en aptitud de cumplir debidamente su cargo.

El señor Araoz: Se exigen dos condiciones previas para ser Juez de Seccion: 1<sup>a</sup> ser ciudadano argentino, y 2<sup>a</sup> tener dos años de ejercicio de abogado en la Confederacion. Por consiguiente, si á un abogado que viene de Bolivia, por ejemplo, á los dos años de residir en la República se le concede la carta de ciudadanía y se le nombra Juez de Seccion, es claro que tiene las condiciones requeridas. Creo, pues, que es bastante con que un abogado haya ejercido dos años la abogacia en nuestro país, para que debamos suponerle bas-

tante instruido en nuestro derecho y en aptitud de servir un Juzgado de Seccion.

El señor Duran: Insisto en que debe exigirse para ser Juez de Seccion los cuatro años de ciudadanía en ejercicio que se exigen para serlo de la Suprema Corte; porque de lo contrario, un ciudadano chileno, por ejemplo, con haber residido en la Confederacion dos años solamente se creeria con accion á ser Juez Federal.

El señor Araoz: La Constitucion exige mayores condiciones para ser Ministro de la Suprema Corte ó Vocales de las Cortes de Distrito, porque es natural que para ocupar esos puestos tan elevados se exijan en el individuo que ha de desempeñarlos todas las garantías posibles de capacidad, integridad, independencia y conocimiento de nuestro derecho que son indispensables para llenar debidamente esos cargos. Pero los asuntos en que deben fallar los Jueces de Seccion no son de la misma importancia, y por esto no se han querido exigir las mismas condiciones, pues que de otro modo nos inhabilitaríamos para tener Jueces de Seccion, desde que hay muchos que pueden serlo, y en quienes no se puede ni debe exigir tantas condiciones como en los Ministros de la Suprema Corte. Esta es la razon porque el Honorable Senado y la Comision no han querido exigir ese cúmulo de condiciones. Por lo demás, no deja de ser una cosa justa que se exijan las condiciones necesarias en aquellos que están encargados de interpretar la Constitucion y las leyes.

Dado el punto por suficientemente discutido se puso á votacion el artículo 32 y fué aprobado por mayoria.

Fué puesto en discusion el artículo 33; su tenor es el siguiente:

Art. 33. Los Jueces del Territorio Federalizado ejercerán, además de la jurisdiccion federal en todos los casos que no esté originariamente atribuida á las Cortes de Distrito, la ordinaria de Provincia.

El señor Garzon: Descarta que el señor Diputado informante se sirva explicar como se concilia en los Jueces de Territorio Federalizado su carácter de Juez Ordinario de Provincia con el de Juez Federal, cuando antes se ha dicho que no es propio que los Jueces de Provincia conozcan en apelacion de sí mismos, y que por esta razon no era posible delegar en ellos la Jurisdiccion Federal.

El señor Funes: El mismo artículo basta para que el señor Diputado se convenza de que en este caso no puede haber apelacion sino ante el Tribunal Superior, puesto que la misma persona que está investida con el carácter de Juez Federal, hace tambien de Juez local, porque se le conceden las dos atribuciones.

El señor Garzon: No me había fijado que es-

te artículo se refiere al Territorio Federalizado, y que esta circunstancia desvanece la contradicción aparente que se nota en él con el artículo 31 ya sancionado.

Puesto á votacion el art. 33 fué aprobado por unanimidad.

Fué puesto en discusion el art. 34; su tenor es el siguiente:

*Art. 34. Los Jueces Federales de Seccion tienen jurisdiccion originaria en los casos en que la Confederacion sea parte y en las causas que se susciten entre vecinos de diferentes Provincias; conocen tambien en apelacion de los Jueces inferiores de la Provincia en los casos regidos por la Constitucion y leyes nacionales, siempre que no se prefiera el recurso al Juez ó Tribunal local Superior.*

El señor García dijo: Ya que se ha consignado en los artículos anteriores el principio general (y en mi concepto absorbente) de la concurrencia de la Justicia Federal, con la de Provincia, desearia que se suprima la última parte de este artículo, porque ella importaría al arbitrio de los litigantes la facultad de recurrir siempre á la Justicia Federal con prescindencia completa de la de Provincia, porque una vez permitido ese abuso, los fallos de los Tribunales de Provincia serían completamente inútiles, y tendrían que seguir una tramitacion completamente distinta de la que debía seguirse cuando conociera en apelacion el Tribunal Superior de Provincia; circunstancia que hace imposible la apelacion á este Tribunal si la Honorable Cámara no tiene á bien suprimir la última parte del artículo que se discute.

El señor Ministro de Justicia: La supresion que pide el señor Diputado preopinante no altera en nada el espíritu de este artículo; porque el señor Diputado debe recordar que la Justicia Federal no se ejerce de oficio segun consta en los artículos anteriores ya sancionados; debe recordar que es necesario que sea requerida por una de las partes, porque si uno de los interesados cree conveniente apelar de la Justicia subalterna al fallo de la Federal, ésta no debe, ni puede impedirsele desde que por los artículos ya sancionados de esta ley se deja al querellante en los casos en que está interesada la Constitucion ó las leyes nacionales, la facultad de conformarse con el fallo de la Justicia de Provincia ó alzarse á la Federal. Este artículo, pues, se ha consignado así para determinar mejor esa facultad que se concede al litigante para mayor garantía de sus derechos, pero la supresion que se pide no alteraría en nada las disposiciones contenidas en los artículos anteriores que la establecen ya, aunque no tan detalladamente.

Debe tenerse presente, además, para tran-

quilizar la conciencia del señor Diputado á quien contesto, y demás señores que se han opuesto á que se establezca la concurrencia de la Justicia Federal con la de Provincia en ciertos casos, que ésta, cuando es requerida, tiene que ver dos cosas antes de fallar en una causa que viene en apelacion de la Justicia de Provincia: 1<sup>a</sup> si el asunto corresponde á la Jurisdiccion Federal, es decir, si afecta á la Constitucion ó las leyes nacionales; y 2<sup>a</sup> si viene en grado, porque si se trae en 1<sup>a</sup> instancia ante la Justicia Federal un asunto en que solo puede conocer en apelacion de los Tribunales de Provincia, el Juez Federal se negará á fallar en ella, pero viniendo en grado de apelacion, no puede dudarse que es de su competencia fallar en el asunto. Así es que aunque este artículo no tenga la parte que se quiere suprimir, siempre los Jueces de Seccion entenderán en apelacion de los Jueces inferiores de Provincia, y esto convencerá al señor Diputado, que la última parte de este artículo se consigna en este lugar solo como explicacion del principio establecido anteriormente.

Despues de esto se suscitó un breve debate entre el señor García que insistió en que debía suprimirse la última parte del artículo aduciendo algunas observaciones en el sentido de las que había emitido anteriormente, á que contestaron el señor Ministro y el señor Funes.

Dado el punto por suficientemente discutido, se puso á votacion el art. 34 y resultó aprobado por mayoría.

Puesto en discusion el art. 35, fué aprobado por unanimidad; su tenor es el siguiente:

*Art. 35. Los Juzgados Federales conocen y deciden de las causas concernientes á sus empleados subalternos en el desempeño de su oficio.*

Se hizo un cuarto intermedio.

Vueltos los señores Diputados á sus asientos, se puso en discusion el art. 36; su tenor es el siguiente:

*Art. 36. Los Jueces de Seccion no podrán ausentarse del territorio de su jurisdiccion por asuntos personales sin licencia de las respectivas Cortes del Distrito, ni del lugar de su residencia sino á objetos del servicio público.*

El señor Garzon: Desearia que el señor Diputado informante se sirva explicar cuáles son los objetos del servicio que pueden alejar á los Jueces Federales del lugar de su residencia; porque si se alejan en cumplimiento de su deber de Jueces, es claro que para esto no se necesita permiso, pero sí es para ocuparlos en tal ó cual mision, eso no puede ser porque se entorpecería la administracion de Justicia y en ese caso debe suprimirse la frase *á objetos del servicio público*, para evitar que el Poder Ejecutivo de la Provincia ó el Go-

bierno Nacional encarguen á los jueces de alguna comision que los aleje del lugar de su residencia entorpeciendo la administracion de Justicia y distrayendo á los Jueces de sus ocupaciones que no deben ser otras que la aplicacion de las leyes.

El señor Punes: Lo que la Comision ha querido es que los Jueces no solo no puedan ausentarse del Distrito á que pertenecen, sino del lugar de su residencia para objetos del servicio público, es decir, en el ejercicio de las funciones de su cargo; pero si se quiere mas claridad la Comision propondrá una redaccion mas explicativa. Por consiguiente, puede redactarse el artículo en estos términos:

Art. 36. Los Jueces de Seccion no podrán ausentarse del Territorio de su jurisdiccion por asuntos personales sin licencia de la respectiva Corte de distrito, ni del lugar de su residencia sino en el desempeño de su cargo.

Puesto á votacion el artículo en estos términos, fué aprobado por unanimidad.

Se puso en discusion el art. 38; su tenor es el siguiente:

Art. 38. Los Jueces y Fiscales de la Corte Suprema, los Jueces y Fiscales de las Cortes de Distrito y los de Seccion son inamovibles de su destino durante su buena comportacion.

El señor Ministro de Justicia dijo: El Honorable Senado solo ha establecido la inamovilidad para los Jueces y Fiscales de la Suprema Corte, y para los Jueces de Distrito y de Seccion, porque se ha tenido presente que los Fiscales de los Tribunales inferiores son abogados del Gobierno Nacional en los casos en que la Confederacion es parte, y que por lo mismo no debia aquel carecer del derecho de reconocerlos cuando no tengan la idoneidad bastante ó no cumplan debidamente su cargo. Por esta razon desearia, señor, que se acepte el artículo del Honorable Senado.

El señor Punes: La Comision ha considerado á los Fiscales de los Tribunales inferiores Federales, no como abogados del Gobierno sino de la Nacion, puesto que la única mision del Fiscal es la de defender la ley y los intereses nacionales. Si el Fiscal ve que un hombre ha sido acusado injustamente debe defenderlo; ni debe obrar siempre en favor del Gobierno ó del Fisco. Siempre lo veremos defendiendo la ley, pues que de otro modo faltaria á su deber. No puedo persuadirme de que la Honorable Cámara crea que el Fiscal, destinado por la ley á llenar una mision tan noble, deba ser el instrumento ciego del Gobierno.

La Constitucion dice en su art. 91 que la Suprema Corte se compondrá de nueve Jue-

ces y dos Fiscales, etc. Se ve, pues, que esos Fiscales formarán parte de ese Tribunal tan alto, y si los Jueces son inamovibles, lo serán tambien los Fiscales que son miembros de este Tribunal. Bien pues, si á los Jueces inferiores se les concede la inamovilidad mientras dure su buena conducta, los Fiscales que forman parte de los Tribunales inferiores no deben ser tampoco renovados ó depuestos mientras cumplan con su deber.

El señor Ministro: La inamovilidad en los Fiscales de los Tribunales Federales inferiores no es una consecuencia de la de los Jueces. Si éstos tienen por única mision defender la ley como lo ha dicho tambien el señor Diputado informante, no basta, señor, para garantizar á la inocencia y á la justicia de la persecucion del Gobierno. Por esa razon el proyecto del Senado solo dice que los Fiscales de la Suprema Corte son inamovibles, como miembros que son de ese Tribunal y sujetos como los Jueces al juicio político que debe iniciarse en esta Cámara y concluir en el Honorable Senado; y es por eso, señor, que han sido declarados inamovibles por la otra Cámara. Pero no están en el mismo caso los Fiscales de los Tribunales inferiores porque estos no han sido declarados inamovibles por la Constitucion, y porque son los abogados del Gobierno en los casos en que la Confederacion es parte. Por consiguiente, si hemos hecho una ley tan liberal que sometemos á la Confederacion al juicio de los Tribunales Federales; si concurre como una de las partes á someterse á su fallo, es justo que le concedamos iguales derechos á la otra parte que tiene el derecho de elegir su defensor y mudarlo cuando lo crea conveniente, y asimismo, señor, debemos conceder á la Confederacion el derecho de nombrar su defensor procurando en ese individuo la mejor idoneidad para defender sus derechos, porque la Confederacion casi nunca será parte activa...

El señor Punes: Lo es en el contrabando, señor Ministro.

El señor Ministro continuó: El contrabando, señor, es una excepcion: los Administradores proceden administrando; pero si en el cumplimiento de ese deber han faltado á las leyes, son juzgados como cualquier otro individuo de la Confederacion; porque si se ha dado por el Congreso una ley sobre contrabando, si el Gobierno debe tener en sus administradores los agentes de esa ley, no es regular que la Confederacion sea demandada cuando aquellos han faltado á la ley. Pero es justo, señor, que el Gobierno tenga un abogado de su confianza para que defienda sus derechos en las causas en que la Confederacion sea parte. Por otra razon deben ser los Fiscales de los Tribunales inferiores amo-

vibles *ad mutum*, y declararse solamente la inamovilidad de los Jueces que es la parte del Tribunal que ha de resolver.

Creo, pues, que la Honorable Cámara debe adoptar el artículo del Honorable Senado que considera amovibles á los Fiscales de los Tribunales inferiores para dejar á la Confederación en igualdad de derechos con la otra parte cuando se presenta á recibir justicia ante los tribunales.

El señor Araoz: Estoy en oposicion á las ideas expresadas por el señor Ministro fundado en el mismo artículo de la Constitución que él ha citado; porque creo que sin necesidad de estar mas que á su texto se deduce de él todo lo contrario. Ese artículo dice así: «Artículo 91. El Poder Judicial de la Confederación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia compuesta de nueve Jueces y dos Fiscales, que residirá en la Capital, y por los demás Tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Confederación.»—Se vé pues que á estar al texto de este artículo la Suprema Corte debe componerse «de Jueces y Fiscales, debiendo tener unos y otros la misma responsabilidad y prerrogativa.» Si, pues, la Constitución ha querido conceder la inamovilidad á los miembros de ese alto Tribunal para garantir los derechos de todos para ponerlo en actitud de obrar con entera independencia é imparcialidad; es claro, señor, que los demás Tribunales Federales que no se establezcan en la Confederación, deben estar organizados de la misma manera que la Suprema Corte. Ese artículo dice que el Congreso debe establecer los Tribunales inferiores.

Está bien; ¿pero cuál es la norma que el Congreso debe tener para establecerlos? Es claro que el espíritu de la Carta y las prescripciones del art. 91 y siguientes.

Luego á estar lógicamente á su espíritu debemos hacer formar parte de los Tribunales inferiores de la Justicia Federal á los Fiscales de esos Tribunales, si no queremos separarnos de la única norma que debemos observar al establecerlos. Véase, pues, que de ese artículo se deduce una doctrina contraria á la que ha deducido el Sr. Ministro; es decir, que los Fiscales deben formar parte de los Tribunales Federales como los mismos Jueces que los constituyen.

Hay además otra razon en favor del artículo tal cual lo propone la Comision. Investiguemos, señor, cual es la causa fundamental, la razon primordial que ha habido para establecer la inamovilidad de los Jueces; cual el pensamiento que han tenido los autores de la Constitución al exigir tantas condiciones, y conceder tales prerrogativas á los Jueces de la Suprema Corte. Ha sido, sin duda, señor, el

de colocarlos en una esfera que no pudieran invadir los otros poderes, para que los Tribunales Federales ofrezcan todas las garantías posibles de independencia é imparcialidad. ¿Cuál es entonces la razon que hay para excluir á los Fiscales de la inamovilidad que se concede á los Jueces? Ninguna, señor; yo no la he escuchado, al menos, en todo el discurso del Sr. Ministro, porque la misma razon que hay para declarar inamovibles á los Jueces, obra en favor de los Fiscales que forman parte del Tribunal, y que tienen el mismo carácter y prerrogativas que la Carta acuerda á los primeros. Véase, pues, que se burlaría el espíritu de la Carta estableciendo una diferencia desfavorable para los Fiscales que tienen que llenar funciones más delicadas y peligrosas que los Jueces, porque son aquellos los que piden la pena en ciertos casos, y solicitan que se aplique, cargando con la primera y más grande responsabilidad. Luego para garantir su independencia y seguridad en el ejercicio de tan delicadas funciones debe concedérseles la garantía de la inamovilidad. Obrar de otra manera seria hacer á los Fiscales el juguete de las partes perjudicadas, porque en ciertos casos pelagra hasta la vida del fiscal.

El señor Ministro ha dicho que los Fiscales son los abogados del Gobierno y que por consiguiente debe dejarse á éste el derecho de removerlos. No sé, señor, de donde se deduce esa doctrina, porque si es positivo que deben defenderse los derechos del Fisco, no lo es menos que el deber de todo Fiscal es defender la ley antes que todo, pero no entra en sus atribuciones el deber de seguir en todos los casos las ideas del Gobierno; porque si no obedeciera siempre á los preceptos de la ley violaría la más sagrada de sus obligaciones. No es, pues, el sentido de la palabra Fiscal el de verdugo, como se cree por algunos que no comprenden, en la noble mision del Fiscal, otro deber que el de pedir siempre una pena ó defender á todo trance, aún á costa de la Justicia, los intereses fiscales ó del Estado Nacional.

Estas son, señor, las principales razones que tengo para estar conforme con el artículo propuesto por la Comision y en oposicion al del Honorable Senado y á las doctrinas sentadas por el Sr. Ministro.

El señor Ocampo: No me sorprende que se ratiocine muy largo sobre este punto: lo que me sorprende es el aplomo con que el señor Diputado informante ha explicado el artículo 91 de la Constitución y su objeto, cuando tiene precisamente un sentido contrario del que le ha querido dar. La Constitución, señor, dice que la Suprema Corte se compondrá de nueve Jueces; y es claro que si ho

habla de once Jueces, los Fiscales no lo son. Además de esto, en el artículo 93, en que habla de la inamovilidad de los Jueces Federales, no dice una palabra de los Fiscales.

El señor Araoz: El artículo 91 dice terminantemente que la Corte Suprema se compondrá de nueve Jueces y dos Fiscales. Por consiguiente los Fiscales hacen parte del Tribunal aunque no fallen ó sentencien en juicio.

El señor Ocampo: Pero el señor Diputado debe fijarse en que el artículo 93 citado establece la inamovilidad de los Jueces Federales y no dice una palabra de los Fiscales.

El señor Ministro: Todo lo que se diga respecto á la inamovilidad de los Jueces está establecido por la Constitución y sancionado por la razón, pero no puede aplicarse á los Fiscales que no son Jueces, ni pueden desempeñar en ningún caso las funciones de aquellos. He dicho ya que la razón que el Honorable Senado ha tenido para declarar inamovibles á los Fiscales de la Suprema Corte, es que la Constitución, en su artículo 41, los sujeta al juicio político del Congreso, porque ha creído que esos funcionarios no pueden ser tocados por el Gobierno ó juzgados por la Justicia ordinaria antes que tuviese lugar el juicio político. Pero no están en el mismo caso los Fiscales de los Tribunales inferiores, porque nada dice de ellos el artículo 41 de la Constitución, que sujeta al juicio político á los de la Suprema Corte; ni el artículo 93 que declara inamovibles á los Jueces Federales hace la menor referencia á los Fiscales. Es decir, pues, que aquéllos y no éstos son inamovibles. Lo contrario sería someter á la Confederación, cuando es parte en una causa, primero al juicio del Fiscal y después al de la Corte, colocándola en peor condición que la otra parte, que tiene la libertad de mudar de defensor. Está visto, pues, que la Constitución solo ha podido establecer la inamovilidad para los Fiscales de los Juzgados inferiores.

Además, señor, cuando la Constitución concede al Ejecutivo la facultad de nombrar á los Jueces Federales con acuerdo del Senado, no dice lo mismo de los Fiscales, y eso prueba que éstos no tienen el carácter de Jueces que se les quiere dar con una pluma en contra de la Constitución y la Justicia.

El señor Ferreira: He pedido la palabra para apoyar el juicio manifestado por el señor Diputado por Jujuy sobre la verdadera inteligencia del artículo 91, porque creo que es la única interpretación que debe dársele.

A mi entender, importa muy poco lo que se ha dicho en oposición, que en el artículo 93 no se hace referencia de los Fiscales al establecer la inamovilidad de los Jueces Federales, pues siendo el principal objeto de los

legisladores, de que no han podido prescindir, asegurar en estas disposiciones la completa independencia del Poder Judicial, que se compone de los Jueces y Fiscales, no han podido, ni debido hacer inamovibles á los unos, y á los otros dependientes del Poder Ejecutivo.

Y á la verdad, señor, ¿cómo podría ser una realidad la completa independencia de los Tribunales Federales si á una parte de sus miembros tan influyente en la administración de Justicia, desde que contribuye en la discusión de los asuntos á formar el juicio de los Jueces, se le pusiese á disposición del Ejecutivo? ¿Qué garantía nos presentarán esos magistrados, que tienen por su noble oficio el sagrado deber de defender los derechos del pobre, de que no se separan de este sendero en las pretensiones exageradas del Poder Ejecutivo, á quien están sometidos y deben forzosamente obedecer so pena de perder su destino? ¿Cuál la seguridad de que no se torcerá la Justicia cuando los particulares concurren á demostrarla ante los Tribunales en oposición á los intereses del Ejecutivo, si á más de su inmenso poder, se coloca también á su lado el apoyo de los Fiscales, tan valioso en la decisión de las causas por el peso de su respetable opinión y miramientos que les guardarán los Jueces con su inmediato contacto?

No sé de donde se ha sacado una doctrina tan especial, se quiere sin duda copiar una institución de los Estados-Unidos, sin advertir que ella es enteramente inaplicable entre nosotros, y que desnaturaliza la condición más útil del ministerio Fiscal según nuestras instituciones.

Se ha dicho que los Fiscales deben defender á la Confederación cuando sea parte en algún asunto y que por lo mismo debe dejarse al Gobierno el derecho de remover á sus defensores cuando los crea ineptos. Mas esto, no es una consideración de gran importancia para que la Cámara pueda adoptar una novedad, que desvirtúa la institución sin ninguna ventaja, convirtiendo á los Fiscales en meros agentes ó apoderados del Gobierno. En tal caso mas bien convendría extinguirla, porque si no han de tener la independencia necesaria para que no se hagan ilusorios los bienes que puede reportar la administración de Justicia, sería nociva en vez de ser provechosa. Además el Ejecutivo tiene demasiado recurso para encontrar abogados ó defensores cuando los necesite; de modo que no hay conveniencia, ni necesidad en hacer una variación tan sustancial.

He leído con mucha atención las razones que se han dado en el Honorable Senado al discutir este punto en favor de semejante re-



forma y ninguna me ha satisfecho, porque en todas ellas no se alega otra cosa que la necesidad de dar á la Confederacion resortes propios para defender sus derechos y que los Fiscales, como representantes del Fisco, son los más á propósito; pero ya he manifestado que la necesidad mas es una paradoja que una realidad, y la representacion que se atribuye á los Fiscales no es tan reducida, porque en todos los paises del mundo, que tienen una administracion de Justicia bien organizada, desempeñan la importantísima mision de defender la jurisdiccion nacional y otros del bien público; mision, señor, que mutilaríamos en sus efectos mas útiles si reducimos los Fiscales á la dependencia del Gobierno.

Estos son los motivos porque me opongo á la reforma introducida por la Comision en el artículo que se discute.

El señor Ministro: Por mas que he deseado escuchar en la exposicion del señor Diputado preopinante una razon poderosa que haga de los Fiscales Jueces, la inamovilidad que la Constitucion acuerda solamente á éstos, no la encuentro, señor. El señor Diputado supone que los Fiscales, en su calidad de abogados del Gobierno, procederán siempre contra el desvalido.

El señor Ferreyra: Quiero que no se despoje á los Fiscales de la preciosa prerrogativa de proteger al desvalido para que cumplan con lo mas noble de su institucion.

El señor Ministro continuó: Pero el señor Diputado no se fija. ó á lo menos no ha expresado razon alguna que demuestre que la amovilidad de los Jueces del Fiscal es un obstáculo para que obre segun su conciencia, para que proteja al desvalido cuando es acusado injustamente. Ni el señor Diputado ignora que el Fiscal no es el Juez, y que suponiendo que aquél, cediendo á la influencia del Gobierno (en el supuesto de que éste quisiera oprimir la inocencia) llevase á un desvalido ante los Tribunales injustamente, en ese caso, señor, esos Jueces que son inamovibles, y que no están en el caso del Fiscal, es claro que no condenarán al inocente.

Se ve, pues, que el Fiscal, segun nuestro sistema, debe ser amovible, ¿por qué si hemos bajado al Gobierno hasta los últimos escalones de la Justicia Federal para que se presente formando parte en las causas que vayan á su fallo; cuando esa soberanía se presenta como parte igual á la otra ante los Tribunales de la Nacion, cuando la Confederacion, en fin, se reputa como un individuo, entonces se quiere, señor, que esa soberanía no tenga un abogado que la represente y defienda ante esos Tribunales, y que se libre completamente al juicio de un Fiscal inamovible, que tal vez por no defenderla declare que la Confederacion

no tiene razon? No señor, esto sería la mayor inconsecuencia.

Es cierto que tomamos esta práctica de los Estados Unidos, y no de las leyes de España que se proponen como modelo que debemos imitar, porque si hemos establecido una democracia semejante á la de Norte-América, si nuestra ley fundamental es muy parecida á la de aquel pueblo, ¿cómo quiere el señor Diputado que solo en este caso nos separemos? Por otra parte, señor, he dicho ya que es muy natural que la Confederacion tenga tambien su abogado en los escalones de la Justicia Federal. Repare el señor Diputado en lo que sucede comunmente entre los litigantes, si un abogado no encuentra justicia á una de las partes, ésta busca otro que la defienda. Bien, pues, esto no puede hacer la Confederacion, si se declaran inamovibles los Fiscales, y tendria que librarse completamente á su juicio, es decir, que perdería su causa casi siempre, porque el Fiscal no puede tener interés en defenderla, desde que sabe que de todos modos conservará su destino; ó diría que la Confederacion no tenía razon, que no podía defenderla, y como la Justicia Federal no procede de oficio, no tendria la Confederacion quien la represente para pedir justicia en ese caso.

El señor Ferreyra: Por lo que ha expuesto el señor Ministro, veo que ha fundado la necesidad de que los Fiscales sean apoderados del Gobierno en el principio de igualdad ante la ley, en razon á que para llenar la intencion de la Constitucion se le ha rebajado haciéndole concurrir como un simple individuo ante los Tribunales Federales. Pero, señor, consultando estos mismos principios es que quiero establecer la inamovilidad de los Fiscales, porque sin ella sería una quimera la verdadera igualdad ante la ley. No habría igualdad posible entre la proteccion acordada á los derechos del Estado, y la que cuentan los particulares para defender los suyos; y para que sea una realidad es preciso que la Confederacion se nivele de tal modo ante la ley que sea en todo igual al último individuo que demande Justicia ante los Tribunales, aunque sea de aquellos que se arrastran en los retretes mas despreciables de nuestras aldeas. Por lo demás, la mengua que se supone en el rango del Poder Ejecutivo, no es exacta, porque la Carta lo ha rodeado de todos los medios y recursos con que regularmente cuentan todos los Gobiernos del mundo que no son absolutos. No hay pues, tal necesidad.

El señor Gonzalez: No estoy conforme ni con el artículo propuesto por la Comision ni con el sancionado por el Honorable Senado; porque creo que, si se declaran inamovibles los Fiscales de la Suprema Corte debe decla-

rarse tambien inamovibles los de las Cortes de Distrito. Opino, señor, que deben ser amovibles los Fiscales de la Suprema Corte y los de los Tribunales inferiores; porque la Constitucion solo declara inamovibles los Jueces, no los Fiscales.

Los Fiscales representan al Gobierno sin que esto sea un inconveniente para que obren siempre con arreglo á la ley. Supóngase que el Gobierno ordene al Fiscal que defienda su accion de tal manera, y que éste se niegue á defenderlo; si ese Fiscal es inamovible, es claro que habríamos puesto al Gobierno en una condicion mas desventajosa que cualquier individuo de la Confederacion, y no es justo dejarle en peor condicion que la otra parte.

El señor Diputado preopinante ha fundado principalmente su exposicion en el supuesto de que el Gobierno es un déspota que está empeñado siempre en hacer mal al inocente y en corromper á los Fiscales. Pero eso, señor, no debe suponerse porque sucede muy rara vez. El Gobierno es la expresion de la opinion pública del país y debe dejársele el derecho de pedir justicia con la misma libertad que cualquier individuo de la Confederacion. Se debe evitar sobre todo el dejar al Gobierno en la posicion desventajosa en que se le pone cuando el Fiscal se niegue á defender su accion.

Es por eso, señor, que la Constitucion no ha dicho que los Fiscales de los Tribunales Federales son inamovibles, y es por eso tambien que votaré por la amovilidad de todos los Fiscales.

El señor Ministro: Yo habria pedido la amovilidad de todos los Fiscales; pero me ha detenido el temor, tal vez exagerado, de contrariar el espíritu de la Constitucion; porque el artículo 41 los declara en el mismo caso de los Ministros de la Corte cuando los sujeta, como aquellos, al juicio político del Congreso. Es por esto, señor, que no he propuesto la amovilidad de todos los Fiscales, porque parece que la Carta hubiese querido rodear á los Fiscales de la Suprema Corte de todos los derechos é inmunidades que concede á los Jueces Federales.

Por otra parte, la Honorable Cámara verá que esos Fiscales solo tienen iniciativa en los casos en que la Suprema Corte ejerce una jurisdiccion originaria; porque en los demás asuntos de la Jurisdiccion Federal vienen las causas ya formadas y falladas por los Tribunales inferiores. Por esta razon se ha creído que no perdería mucho el Ejecutivo si se concedía la inamovilidad á los Fiscales de la Suprema Corte. Pero los de los Tribunales inferiores no están en el mismo caso, porque concederles la inamovilidad sería cortar al

Gobierno los recursos que tiene para obligar á un Fiscal á que defienda sus acciones.

El señor Funes: Sin duda que la Constitucion no declara terminantemente que los Fiscales de los Tribunales Federales son inamovibles, pues si lo declarase no habria cuestion; pero estamos haciendo una ley que debe reglamentar los principios de la Constitucion que considera á los Fiscales de la Suprema Corte como miembros de ese Tribunal; porque exige en aquellos las mismas condiciones que se requieren para ser Juez, es decir, que se supone en el Fiscal las mismas aptitudes y capacidad que en un Juez, la misma independencia en el ejercicio de sus funciones que son tan altas como las de aquél. Por consiguiente, los Fiscales tienen tanta responsabilidad ó tal vez mas que los Jueces, porque la responsabilidad de un fallo no pesa tanto sobre nueve individuos como sobre uno solo.

El señor Ministro ha citado un caso práctico, y dice que declarada la inamovilidad de los Fiscales, cuando uno de ellos no quiera defender al Gobierno, éste no tendrá quien lo represente ante los Tribunales. ¿Se quiere entonces Fiscales que estén siempre defendiendo el parecer del Gobierno, aunque éste no tenga razon? Declarada la amovilidad de los Fiscales, cuando el Gobierno tuviese un asunto ilegítimo y el Fiscal se negare á defenderlo, es claro que mudaría Fiscales hasta encontrar uno tan complaciente que fuese siempre del parecer del Gobierno. Pero esto no garantiza los derechos del ciudadano ni es lo que quiere la Constitucion. Véase pues, que es una deducccion muy exacta de los principios de la Carta la inamovilidad de los Fiscales de los Tribunales Federales.

Como he notado que están divididas las opiniones sobre este artículo me parece oportuno que se vote por incisos.

El señor Gonzalez hizo mocion para que se suspendiese la discusion de este artículo hasta la sesion siguiente, fundándose en que éste era un punto sumamente delicado que debia votarse con mas luces. Fué suficientemente apoyada esta mocion.

El señor Ministro: Aunque debe suspenderse la consideracion de este asunto hasta la sesion inmediata no quiero dejar sin contestacion algunas observaciones que se han hecho por el señor Diputado preopinante. Cuando he hablado de la inamovilidad de los Jueces y de la amovilidad de los Fiscales, me he referido al artículo 93 de la Constitucion que establece que los Jueces de la Suprema Corte y de los Tribunales inferiores conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta; pero no hice la menor referencia á los Fiscales.

Cuando he hablado de los Ministros de la

Suprema Corte como justiciables por el Congreso, me ha referido entonces á los términos del artículo 41 de la Constitución que incluye á los miembros de la Suprema Corte entre los funcionarios que pueden ser acusados ante el Senado por esta Honorable Cámara.

Se ha contestado como una cosa que repugna mucho al honor de un hombre la facultad que se le quiere conceder al Gobierno para remover á los Fiscales de los Tribunales inferiores cuando lo crea necesario. Esto es un poco exagerado, señor, porque no debe suponerse que el Gobierno esté haciendo siempre exigencias injustas á sus abogados, y con este motivo se vea en la necesidad de mudar de fiscales todos los días; porque en el mismo caso que aquellos están los Ministros del Ejecutivo puesto que tambien pueden ser removidos, y sin embargo, los Ministros no son removidos todos los días, ni debe suponerse que á esos funcionarios, que deben considerarse hombres de honor, se les obligue á cometer injusticias todos los días.

Hay ciertos empleos, señor, que por su

naturaleza deben ser amovibles, como es el Fiscal de los Tribunales inferiores, porque la Justicia Federal no procede de oficio, es necesario que alguien la requiera; y cuando los Fiscales se negasen á defender la acción del Gobierno serían irresponsables, y aquél carecería de defensores.

Es por esta razón que no he querido que pasen sin contestación algunas observaciones que podrían estraviar el juicio de la Honorable Cámara.

El señor Gonzalez expuso que reiteraba su moción y que habiendo sido apoyada debía votarse.

Se fijó la proposición, si se suspende ó no la discusión del artículo 38 hasta la sesión siguiente, y verificado el sufragio resultó la afirmativa por mayoría.

Inmediatamente se levantó la sesión siendo las cuatro y cuarto de la tarde.

M. LUQUE.

*Benjamin de Igarzabal.*

Secretario.